

ZAPATERO Y LOS DESPERFECTOS EN CATALUÑA

1. SIN ALIENTO POLÍTICO

La inconexión entre el conjunto de España y Cataluña ha aumentado entre las elecciones autonómicas de 2003 y las recientes de noviembre de 2006 hasta un grado que se hubiera considerado insostenible en los mejores momentos de la Transición democrática. La constitución del primer tripartito, presidido por Pasqual Maragall, el proceso del nuevo Estatuto de autonomía y el segundo tripartito ahondan en el asentamiento de la sociedad catalana en una incertidumbre acomodaticia, desactivan en parte la sinergia de una España en el umbral del siglo XXI, promueven una paulatina carencia de credibilidad institucional y contribuyen de forma gravosa a una crisis de futuro.

El gran constitucionalista italiano, Gustavo Zagrebelsky, dijo que al aniquilar el momento fundacional lo que se hacía era erosionar la Constitución. Ése ha sido uno de los errores históricos del nacionalismo catalán, secundado en las fases más recientes por el socialismo. Fue en otoño de 1921 cuando los partidos políticos *Acció Catalana* –una escisión de la *Lliga*– y *Estat Català* enviaron un telegrama a Abd El-Krim, el cabecilla de la revuelta contra España en el Rif. El telegrama decía: “Ante vuestra valiente resolución en defensa de la Patria marroquí amenazada por España, los hijos de Cataluña os envían un mensaje de simpatía. No es la primera vez que la tierra catalana de-

Valentí Puig es escritor y periodista.

muestra su protesta por la invasión de Marruecos. Recordad la revuelta de julio de 1909. Hoy Cataluña también condena los métodos bárbaros usados por el ejército español. Salud. Coraje. Que viváis por muchos años”. Era la actitud de un nacionalismo primitivista y montaraz, en la misma época en que la *Lliga* de Cambó buscaba trazar puentes. Sin los mismos motivos, una actitud similar llevó a Carod-Rovira a hablar con ETA en Perpiñán, transcurrida la larga etapa posibilista del pujolismo. A un extremo del nacionalismo catalán aparece de costumbre la fuerza negativa de la deslealtad. No por otra razón Ortega –quizás más previsor que Azaña en el debate del Estatuto catalán en la Segunda República– limitaba las opciones a la conllevancia.

Institucionalmente, Cataluña ha entrado en fase de cuarto menguante, en un proceso de desarticulación político-mediática que altera los antiguos postulados de una opinión pública que nunca había llegado hasta los actuales extremos de autocomplacencia en coincidencia con la pérdida gradual de autoestima. La sociedad catalana –desvinculada, carente de las tramas propias de una sociedad civil real– pierde capacidad competitiva y visión de futuro. Aparecen nuevas formas de disidencia, nuevas voces, pero el sistema institucional generado por el catalanismo se resiste a integrarlas, precisamente porque esa integración sería el reconocimiento de un fracaso histórico. Sólo en términos más museísticos que operativos la idea de Cataluña pudiera hoy suscitar acción política renovadora o sugestión cívica.

Tan solo unas nuevas elites pudieran recomponer la veracidad de todo el sistema de opinión pública, pero ése es un empeño a todas luces caduco mientras el partido del abstencionismo gana terreno y la disidencia tiene que expresarse prácticamente extramuros del sistema. La concatenación de errores y de obcecaciones, de partidismo y cerrazón institucional tal vez sólo pudiera ser superada de aparecer gradualmente en Cataluña un nuevo *demos*. Lo imposibilita el déficit democrático de Cataluña que representa la abstención de sectores amplios de la sociedad en aquellas convocatorias electorales en las que se dirimen asuntos autonómicos. Según la Fundación Jaume Bofill, Cataluña es la Comunidad con una abstención diferencial –distancia entre participación en legislativas y en autonómicas– más alta. A diferencia del tan traído y llevado déficit democrático de la Unión Europea, en el caso catalán su sistema de representación a escala autonómica es algo corpóreo y con-

creto, pero carece de atractivo para elevados porcentajes del censo electoral. En ese magma abstencionista, cuando no vota, el provecho ha sido para CiU –en lecciones autonómicas– y su hegemonía en la *Generalitat*; al votar –en elecciones generales– ha aportado hasta ahora un sustancioso número de escaños al PSOE en el Congreso de los Diputados.

En el referéndum de la Ley para la Reforma Política el porcentaje de abstención fue de un 25,90, en el referéndum de la Constitución en 1978 estuvo en un 32 por ciento, fue de un 77,19 en la consulta sobre la OTAN y –como era de esperar– pasó del 59 por ciento en el referéndum del Tratado Constitucional europeo. En 1979, al votar el Estatuto de autonomía que recuperaba históricamente tantas cosas según las demandas del nacionalismo histórico, la abstención pasó del 40 por ciento. En comparación, la máxima abstención en elecciones generales ha sido de un 36 por ciento, y la mínima del 19 por ciento. En cambio, en elecciones autonómicas, hubo un 45,1 de abstención en 1994 y en la banda mínima un 35,7 en 1984.

La profusa complicidad político-mediática –ejemplificada por el ambiguo concepto de transversalidad catalanista– ha creado una virtualidad en la que no encajan –según los índices de abstención– en torno a un 40 por ciento de los contribuyentes catalanes, lo que Tarradellas a su regreso llamó *ciutadans de Catalunya* para evitar la nociva disquisición sobre quienes son o no son catalanes. Para el nacionalismo irredentista, quienes no votan lógicamente no son catalanes porque para ser catalán hay que demostrar apego identitario y fusión íntima con la nación catalana y sus destinos infinitos.

De hecho, salvo en el caso de la OTAN, la abstención siempre ha sido incomparablemente más alta que cualquier no. El no en el referéndum de la Reforma Política estuvo en un 2,1 por ciento; 4,6 votó no a la Constitución; 7,8 al Estatuto del 1979, por encima del no de los dos referendos anteriores; llegó al 27,9 ante el Tratado Constitucional europeo. El 51 por ciento del no a la OTAN pasó por delante del porcentaje de abstención en un 15 por ciento.

En general, el ciudadano abstencionista no se confía al encuestador. En el caso de Cataluña el abstencionismo es una pauta de las elecciones auto-

nómicas, a la que se adscriben muchos votantes del socialismo en las elecciones generales. Por eso en las elecciones generales ganaban los socialistas y el pujolismo salía más votado en las autonómicas. Ese mismo voto abstencionista participa luego en las elecciones municipales.

No es ésa una penúltima crisis del nacionalismo catalán: ahora se trata ya de una crisis de Cataluña. No una crisis de una cierta idea de Cataluña sino una crisis de la Cataluña real porque afecta a su capacidad de competir y al margen de maniobra de la libre iniciativa de los individuos. En no menor medida, de enquistarse en el volumen social de Cataluña, el déficit de representatividad tiene diagnóstico de gravedad. En 1934, Gaziol –Agustí Calvet– escribía que Cataluña, de incapacidad política innata, ingobernable y atávica, era un alma en pena que busca angustiosamente un cuerpo político en el que encarnarse con comodidad. Ese juicio partía de una interpretación histórica previa: para Gaziol, “se mire como se mire, el caso de Cataluña, en términos de nacionalismo, es un caso perdido”. Gaziol acertaba al definir como callejón sin salida todo lo que fuese plantear el problema de Cataluña es un plano exclusivo de nacionalismo, como una lucha entre dos nacionalidades del mismo grado, una opresora y la otra oprimida.

España no se quiebra en unas horas pero su trabazón y su dinámica vital pueden debilitarse e irse agrietando. Esos son procesos a veces largos y a veces más breves de que lo que se calculaba. Dificilmente pueden invertir el sentido de la marcha de algo que existe firmemente desde hace más de cinco siglos y que remonta su proceso de formación hasta casi dos milenios, pero poner en duda una y otra vez sus razones fundacionales en cada ciclo histórico desarticula las normas de convivencia constitucional. Quizás es precisamente por eso que prosiguen el nacionalismo catalán y vasco negándose a aceptar que España no es juego de suma cero.

La concatenación inconsecuente de acontecimientos en Cataluña tiene los síntomas de una irreflexiva hiperactividad política pero en realidad corresponde a una parálisis. Causa perplejidad contemplar a todo un *Establishment* político-institucional entregado a la autocomplacencia particularista. La depreciación del capital simbólico del catalanismo habrá alcanzado uno de sus máximos históricos. Las culpas siempre serán del Otro. La sentimentalidad

de Cataluña se hará cínica, por quebranto. Será un dato para la melancolía creciente la comparación entre una Barcelona desalentada y un Madrid pujante. La economía de Cataluña lleva tres años creciendo por debajo de la media española. En su nuevo papel de augur *au dessus de la mêlée*, Jordi Pujol está advirtiendo que Cataluña no pasa por un buen momento y que eso provoca desgaste, cansancio y desorientación en la sociedad catalana.

Por mucha fuerza disciplinaria que Montilla logre aplicar a la conducción del nuevo tripartito, cuesta ver una Cataluña con aliento político. Para el nacionalismo de CiU únicamente una regeneración conceptual y estratégica de mucho calado permite atribuirle un futuro a la altura de las circunstancias. Para el socialismo, el retroceso electoral y el choque entre las claves políticas de la Moncloa y del PSC dificulta la gestión nítida de los intereses de los ciudadanos. Tan solo un relanzamiento cualitativo haría factible que el PP tenga en Cataluña un papel que se aparte de la indeterminación y sea proporcionalmente complementario del centro-derecha en toda España. Son readaptaciones a la realidad que raramente se producen en períodos de tanta fatiga como la que hoy se detecta en la sociedad catalana, en su mitología y en alejamiento de un Estado hoy lastrado por la disfuncionalidad de un nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña que pocos anhelaban aunque muy pocos lo reconocieron.

2. CATALUÑA EN LA MONCLOA

Un 14 de diciembre de 2003, se constituyó el tripartito en el Tinell. El acto tuvo formato de juramento eterno. En realidad, sumaban fuerzas los partidos que habían obtenido en las elecciones autonómicas unos resultados que las situaban como segunda, tercera y quinta en número de escaños. Los resultados de las elecciones habían sido, en escaños, CIU, 46; PSC, 42; ERC, 23; PP, 15; ICV, 9. En votos, PSC, 1.026.030, con una ligera ventaja sobre los 1.018.115 de CiU; 542.045, ERC; PP, 390.650; ICV, 240.358. La abstención se cifró en un 37,5 por ciento.

En la jornada del Tinell, pareció lo más natural del mundo que un anexo del pacto especificase que los tres firmantes se conjuraban para “impedir la

presencia del PP en el gobierno el Estado”, renunciando a establecer con el PP “pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”. Lo que parecía inicialmente un discurso táctico acabó por afectar los fundamentos de la Transición democrática y en consecuencia –según, de nuevo, Zagrebelsky– erosionar directa o indirectamente la Constitución. Tanto tal anexo como la iniciativa estatutaria que aparecía como gallardete del tripartito eran propuestas manifiestamente destinadas a dañar un futuro gobierno del PP, previsiblemente vencedor –ya con Mariano Rajoy como líder, con o sin mayoría absoluta– en las elecciones generales que tendrían lugar en marzo de 2004.

Al constituirse el nuevo gobierno autonómico, Zapatero fue el invitado especial. Asomó al balcón del palacio de la *Generalitat*. La fórmula del Tinell había quedado registrada en su memoria como una vía posible hacia la Moncloa. Al poco dijo que daría su apoyo al proyecto de *Estatut* tal cual le fuera remitido por el nuevo parlamento autonómico de Cataluña. La ligereza en las afirmaciones prometedoras de un líder de la oposición suelen ser un lastre carísimo cuando se llega al poder y es por eso que en ocasiones uno sólo las cumple tangencialmente. En parte, así ocurrió con el proyecto estatutario que, tanto en el momento de su intención, de su redactado y discusión fue constantemente ajeno a los deseos y necesidades de la sociedad catalana.

Los rescoldos deterministas del nacionalismo identitario se contraponen de forma muy primaria a la noción de pluralismo crítico según Karl Popper. El pluralismo crítico es la postura por la cual, en interés de la búsqueda de la verdad, toda teoría –cuantas más teorías mejor– debe admitirse en competencia con otras teorías. En gran parte, para eso se convoca un referéndum, para que cada ciudadano contraste y decida. Por el contrario, la postura pro-*Estatut* –aunque en el fondo fuese un “mix” de intereses electorales y partidistas en contradicción– iba zapando el célebre principio de fiabilidad que para Popper constituye la base a una discusión racional: quizás yo no tengo razón, y quizás tú la tienes o tal vez estemos equivocados los dos.

Después de un debate en el que abundó la fumistería y sobre todo el irrealismo, un 90 por ciento de la cámara autonómica votó el proyecto

estatutario. No faltaba otro elemento retórico para extrapolar ese porcentaje al conjunto de los catalanes, procediendo a una de las falacias más acusadas de la Cataluña contemporánea: puesto que toda la sociedad catalana –ese 90 por ciento de escaño– estaba en bloque con el proyecto de *Estatut*, quien se opusiera a su formulación maximalista e irreal de hecho se enfrentaba a todos los catalanes y, en definitiva, a los derechos esencialistas de Cataluña. PSC-PSOE, CIU, IU y ERC coincidieron entonces en la práctica de uno de los rasgos más acusados del nacionalismo que consiste en no tener normas que le hagan regular sus vínculos o distancias con todo lo que existe más allá de su perímetro. En este caso, más allá de su perímetro estaba no tan solo el conjunto de España sino también –como se veía en las encuestas– porcentajes elevados de la ciudadanía catalana que luego votarían “no” o, sobre todo, se abstendrían. A la práctica licuefacción de no pocos mitos centrales del catalanismo, la contribución del aventurismo visionario de Zapatero fue determinante en aquel momento.

Mientras tanto el tripartito catalán no lograba dar la impresión de gobierno real y efectivo. Verbalismo y demagogia restaban credibilidad a un Maragall de quien se había esperado cierto confusionismo político pero a la vez algo de imaginación. Entonces optó por arrojarse en sus propios errores y pretender que se transformasen en votos de confirmación personal en el referéndum sobre el nuevo Estatuto. Si ERC fue su aliado predilecto, Carod-Rovira sería quien le iba a poner en grandes apuros. Su entrevista con ETA en Perpiñán obligó a Maragall a retirarle su confianza como *conseller en cap* y cuando ERC propugnó el “no” en el referéndum del *Estatut* que aparentemente había sido la única razón de ser del tripartito, Maragall se vio obligado a prescindir del aliado republicano-independientista y, en consecuencia, a convocar elecciones anticipadas. Mientras tanto, desde que Zapatero había llegado al poder después del 11-M con el apoyo parlamentario de IU y ERC ya había tenido ocasión de percartarse de los costos de la fotografía con ERC, tanto en el conjunto de España como en sectores de su propio partido. Para solventar los problemas que le planteaban los prismas anticonstitucionales del *Estatut* tanteó a CiU a riesgo de que entenderse con Artur Mas, líder de la oposición al tripartito en Cataluña, constituyese una afrenta a Pasqual Maragall y al PSC.

Si la sociedad catalana en el pasado creyó poder delegar en el ir tirando del pujolismo, haber confiado luego en la sucesión maragallista le estaba saliendo muy caro. Las cosas se habían hecho mal, y empeoraban de forma vertiginosa. CiU reclamó elecciones antes del referéndum y a la vez se ofrecía a un entendimiento con el PSC para arrumbar a ERC. La irresponsabilidad histórica y política de ERC –inseparable de su sistema genético fundacional– ha sido la espoleta, pero quien dejó entrar la zorra en el gallinero fue Maragall.

El proyecto de *Estatut* se presentó en Madrid al redoble del 90 por ciento de votos en el parlamento autonómico, pero las encuestas le daban poco más del 50 por ciento del voto de los ciudadanos de Cataluña. Un 40 por ciento del voto soberano se había evaporado por el camino aunque prácticamente todo el sistema mediático de Cataluña, público y privado, se empeñase en generar un clima favorable al sí hasta el punto de que la ocasión pudiera ser indicada para la pura holganza del pluralismo. Oficialmente, el abstencionismo ha sido habitualmente tan relegado a la condición de anécdota que se minimizó incluso antes de un referéndum sobre un *Estatut* de tan escasos fervores.

En las Cortes, el *Estatut* tuvo 189 votos a favor y 154 en contra. Era un “sí” representativo del 54 por ciento de la Cámara pero no sumaba PP y PSOE al contrario de las grandes iniciativas del pasado, en las que nunca quedaba excluido ninguno de los dos grandes partidos. De nuevo era constatable que al aniquilar el momento fundacional –como era la clara intención de Zapatero– lo que se hacía era erosionar la Constitución. Inicialmente, en cada Estatuto de autonomía hubo un acuerdo entre UCD y PSOE, luego reformas similares fueron emprendidas siempre en el supuesto de que PSOE y PP sumarían. Otro cálculo no es para el olvido: según la votación del Congreso, el *Estatut* tuvo en contra a más del 40 por ciento del electorado nacional –escribió Antonio Fontán en *Nueva Revista*– y a un número muy estimable, si no muy alto, de los ciudadanos que votan socialista en las otras Comunidades Autónomas.

Al propugnar el “no” que la descabalgó del tripartito, ERC buscó capitalizar el descontento del nacionalismo radical con un *Estatut* que se consideraba insuficiente para los destinos de Cataluña y que, con prepotencia

excluyente su portavoz, Joan Puigcercós, describió como bueno para cualquier región de España pero malo para Cataluña como “nación de Europa”. En el caso de ERC, las tensiones internas eran del calibre de una lucha entre clanes sin ni tan siquiera respeto a las normas elementales del juego. Quizás era inevitable que reapareciera lo peor del talante histórico de ERC, destructivo y autodestructivo, remozado con los peores añadidos: por ejemplo, el carácter asambleario que ponía en contradicción a líderes y militantes con motivo del sentido del voto a emitir en el referéndum sobre el nuevo Estatuto de autonomía.

Si el frente del “sí” quedó compuesto por PSC, CIU e ICV, el PP asumió la postura del “no”, con lo que la estrategia de aislamiento iniciada en el pacto del Tinell llegó a la exacerbación. Si la UCD de Adolfo Suárez obtuvo muy buenos resultados en Cataluña, su desaparición política incrementó tangiblemente los votos del pujolismo. A partir de entonces, el centro-derecha representado por la AP que luego iba a reformularse como PP pasó por una incontable sucesión de lideratos y estrategias en Cataluña, sin claridad, personalistas, discontinuas, perennemente en la disyuntiva entre la incardinación estricta en la estrategia nacional o la dimensión de los márgenes de maniobra en el ámbito catalán.

Es postulable que desde finales de la Restauración y la desaparición de los partidos dinásticos, la emergencia del catalanismo con la *Lliga* entonces como fuerza principal, no ha sido nunca lograda la interconexión de la derecha catalana y la que opera en el conjunto de España. Los intentos han sido múltiples –Maura y Cambó, por ejemplo– pero sin resultado sólido. Tanto UCD como el PP ofrecieron a CiU entrar en el gobierno en varias ocasiones pero Jordi Pujol siempre se negó, alguna vez incluso cuando todo estaba a punto de cuajar. También fue desconsiderada por parte de CiU la presidencia del Senado. En el período más inmediato, la cooperación más positiva entre PP y CiU se dio con los pactos del Majestic, cuando después de las elecciones generales de 1996 el pujolismo dio apoyo parlamentario al gobierno de Aznar y se comprometió a no proponer reforma alguna del *Estatut* en vigor, al tiempo que se establecía todo un marco de transacciones y contrapartidas. Luego, con la mayoría absoluta de Aznar en las siguientes elecciones, se fue materializando una distancia entre CiU y PP aunque desde antes los medios

de comunicación de la *Generalitat* algo contribuyeron a la versión en negativo del PP. Así se llegó a la formulación bastante imprecisa y cambiante de lo que se definiría como “giro catalanista” del PP. En el debate estatutario, el PP acertó al diagnosticar que al común de los mortales se le escapaba en qué modo el *Estatut* haría que Cataluña fuese más próspera, más competitiva o –por decirlo así– más Cataluña. Lo que estaba más a la vista era un *Estatut* urdido para enfrentarse a un gobierno del PP. Acertar en el diagnóstico, sin embargo, no significó zafarse de un intensa campaña de estigmatización y acoso violento. No han faltado las antítesis y modulaciones contradictorias en el mensaje del PP.

En conjunto, Los retoques que pudiera requerir el Estado de las Autonomías aconsejaban no introducir subrepticamente factores que implicaban de uno u otro modo una reforma constitucional. El procedimiento conveniente hubiese sido exactamente el contrario: primero recabar el consenso amplísimo –con PSOE y PP, ineludiblemente– que exige un retoque constitucional y, posteriormente, proceder a las reformas estatutarias. En otras comunidades autónomas se activaba el agravio comparativo y, en definitiva, la escalada estatutaria. Esas cosas tienen una definición: política mal hecha, oportunismo, concesión a minorías para insatisfacción de mayorías.

Día a día, por no decir hora por hora, se hacía más visible el desconcierto generado por Pasqual Maragall en la sociedad catalana. Pasaba por ser un político sin apego patológico por el poder, un político imaginativo y poco convencional, pero resultó que nada le importaba más, hasta incluso pagar el precio de la erosión de su partido en Cataluña. En las proximidades del referéndum, el 51 por ciento de los catalanes pensaba que Maragall no debiera repetir como candidato. En el PSOE su popularidad era muy escasa. En el tripartito sólo le obedecían los post-comunistas porque sin Maragall no sabrían a dónde ir. Finalmente, ERC dejó el tripartito. A nadie le supo tan mal como a Maragall.

Aumentó, según las encuestas, el porcentaje de ciudadanos que preferían un pacto entre los socialistas –PSC– y CiU. En cambio, perdía apoyo el tripartito. Ése era el sustrato de opinión pública a pocas semanas del referéndum sobre un *Estatut* que pocos deseaban y que ya se percibía como un

episodio fantasmagórico que toda la clase política catalana querría ver disolverse en la nada, como si nada hubiese ocurrido y pasado mañana mismo se pudiera volver a los mismos juegos de siempre.

Al explicar ante el parlamento autonómico por qué prescindió de ERC, Maragall parecía un boxeador a la espera del golpe de campana que finaliza el asalto porque ha llegado más allá de sus fuerzas. Ya contaba muy poco la figura de un presidente de la Generalitat que por querer moverlo todo había acabado en el inmovilismo integral. Si en algún momento hubo un pacto para no agredirse ni hacerse la zancadilla antes del referéndum, CiU ya le insinuaba a Maragall que siempre hay tiempo para una moción de censura.

La incontinencia política de Pasqual Maragall está en el origen de esa tediosa logomaquia, con el beneplácito inicial de Rodríguez Zapatero. Para atajar una campaña de la *Generalitat* que incitaba al voto, la Junta Electoral Central tuvo que terciar con la doctrina de que la abstención es una opción electoral tan legítima como el sí o el no.

El domingo 18 de junio de 2006, en el referéndum para el Estatuto de Autonomía, sobre un censo de 5.202.291, votaron 2.570.478, con un total de votos afirmativos que llegaba a 1.882.650, frente a 528.721 votos negativos. Es decir: se abstuvo un 50,59 por ciento. El sí fue el 73,90 % del voto emitido y el no 20,76 %. Hubo 136.650 votos en blanco. De acuerdo con un estudio del CIS inmediatamente después del referéndum, un total de 62,9 % manifestaba haber seguido con poco o sin ningún interés la campaña. Reconocía un grado “bajo” de conocimiento del *Estatut* un 46,6 por ciento, pero el 42,3 se declaraba satisfecho con el resultado final.

La encuesta del CIS permitía algún parangón muy curioso, porque declaraba votar siempre o casi siempre un 76,4 por ciento, declaraba haber ido a votar un 66,4 por ciento pero la participación escrutada era realmente tan solo de un 49,41 por ciento. Era una disparidad notable y significativa. En otro plano, decía haber votado sí un 65,8 y no el 14,5, con un voto en blanco de 7,1 por ciento. En realidad, los encuestados olvidaban muy pronto lo votado o querían olvidarlo: 73,90 de sí, 20,76 de no y 5,34 en blanco.

El nuevo Estatuto de autonomía tan prolijo e intervencionista equivale al error que –según Sartori– significa equiparar los derechos materiales a los derechos formales: error y a la vez “estupidez práctica que transforma a una sociedad de beneficiados en una sociedad protestataria de descontentos”. En el pleno para la aprobación del Estatuto de Cataluña, Mariano Rajoy, líder del PP, formuló la racionalidad de su oposición al proyecto. Es cierto que el *Estatut* aprobado en Madrid difiere notablemente del enviado por el parlamento autonómico de Cataluña pero permanece una pregunta de Rajoy en su intervención: “¿Conocen ustedes algún país del mundo en el que las competencias de un Estado las fije una parte del territorio?”. Es decir: “No cabe paridad entre la parte y el todo, entre quien autoriza y es autorizado”. El nacionalismo catalán perserveraba en el más acusado de sus errores históricos y en esta ocasión con el beneplácito de un miembro del PSOE, presidente de Gobierno.

Si Maragall había sostenido que después del logro del nuevo Estatuto llegaría la hora de gestionar, desaires, incompatibilidades y despropósitos condujeron a una convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas que desacreditaba finalmente aquel ejecutivo tripartito, dejaba aún más malparada la tarea estatutaria, dañaba la autoridad de Zapatero y convertía Pasqual Maragall en un cadáver político. Incluso en la concreción de la fecha electoral –1 de noviembre de 2006– hubo por parte de Maragall nuevas cotas erráticas. Ya flotaba en el aire la posibilidad de un efecto Zapatero, un voto a Zapatero, como si de unas elecciones generales se tratase, para revalidar una trayectoria con tregua de ETA y *Estatut* incluidos, lo cual sería una paradoja apreciable. Contribuyó a esa hipótesis –luego probada ilusoria– la alta popularidad de Zapatero en Cataluña, superior a la del resto de España. Poco más de dos años había durado un tripartito llegado como la última oportunidad para una izquierda a punto de desahucio. Entre tantos, fue aquel uno de los momentos menos acertados en la historia política de Cataluña.

3. LA NOCHE LARGA DE MONTILLA

Zapatero se prodigó en la campaña, un esfuerzo que no carecía de lógica puesto que su popularidad en Cataluña es la más alta de toda la que tiene en España y porque la victoria de los socialistas le iba a ser un paseo hacia la re-

constitución de su arquitectura parlamentaria, distanciando a CiU del PP y manteniendo la vista puesta en el País Vasco, donde las cosas no le iban bien. A decir verdad, en los bloques informativos de TV3 –recusados por los periodistas de la casa– no pocas veces hablaba más Zapatero que Montilla. A última hora, los intentos de reforzar la imagen de Montilla fueron infructuosos. La consecuencia le fue dolorosamente tangible al final del recuento: en Barcelona ciudad, el PSC-PSOE se llevaba un batacazo y el cinturón de la capital catalana no resultó ser la fortaleza inexpugnable del voto socialista. CiU pasó por delante del PSC-PSOE en Barcelona, del mismo modo que en votos y escaños fue la más votada en las cuatro circunscripciones. Zapatero no cautivaba votos ni reducía el abstencionismo. El dato más aparatoso e inquietante es que no fueron a votar 2,2 millones de un total censado de 5,2. Los votos en blanco fueron 60.000.

En escaños, CiU obtuvo 48 –6 más que en 2003–; PSC, 37 –11 menos–; ERC tuvo 21 –bajaba 2–; PP logró 14 –bajando 1–; ICV pasaba de 9 a 12. Como nuevo partido en liza, *Ciutadans* entraba en el parlamento autonómico con 3. En un primer análisis, esta nueva formación arrancó un escaño al PP y dos al PSC, aunque no es menos cierto que también obtuvo la confianza de primeros votantes. La designación de Montilla como candidato no había calmado al sector crítico del PSC, representado en parte por la plataforma Ágora Socialista. Le calificaron de “líder sumiso”, “descafeinado”. Al inicio de la campaña electoral, Ágora Socialista había alabado las posiciones de *Ciutadans*.

En clave de PSC, el resultado de las elecciones autonómicas del 1 de noviembre tiene por rocambolesco ganador en votos a Pasqual Maragall, frente al resultado obtenido por Montilla y por la reconstitución de un tripartito que durante su presidencia pasó por vicisitudes como el apartamiento de Carod-Rovira por su entrevista con ETA en Perpiñán, el hundimiento del Carmelo, el escándalo *interruptus* del tres por ciento y el descabalgamiento final del entonces presidente como candidato en las elecciones anticipadas. Con un resultado tan poco favorable, la presencia activa de Zapatero quedaba significativamente depreciada.

Lo más llamativo para los socialistas fue la pérdida de 241.687 votos respecto a las elecciones de 2003. Dicho de otro modo: tras los dos años y

medio de experiencia del tripartito y de la presidencia de Maragall, el PSC perdía un 23 por ciento de sus votos. Tres años antes, el PSC había sido el partido con más votos, aunque CiU le pasara de 4 escaños. En votos, todos los partidos perdieron terreno, menos ICV. Siendo ganador, CiU perdió un 9 % -95.914 votos-; ERC, un 23 por ciento -130.257- y PP un 20 % -80.020.

Destaca la pérdida de votos en Barcelona por parte del PSC: un 6,30 por ciento, mientras que CiU ganaba 1,46 respecto a 2003. En una visión panorámica, el resultado del PSC era el peor de su historia en la ciudad de Barcelona. Perdía 70.000, mientras que Ciutadans obtenía 31.951 -cuantificable en cerca de un 6 % en Les Corts y Sarrià-. El PP -93.932 votos- pasaba de un 15,15 al 13,26; con 86.050 votos; ERC, del 15,56 al 12,14. Solo ICV subía, con 84.713 votos, un 3,44.

Según un análisis de la redacción de *ABC* en Cataluña, al extrapolar los resultados autonómicos en la perspectiva de las elecciones municipales del próximo mayo el PSC prosigue su descenso electoral. En las municipales de 2003, retrocedió 80.000 votos y perdió cinco concejales. Con las precauciones de toda extrapolación, CiU -liderado en el ayuntamiento por Xavier Trias- aventajaría ya al PSC en número de actas, perdiendo su hegemonía tradicional en barrios de intensa demografía. En total, la candidatura socialista encabezada por Jordi Hereu -después del traslado de Clos a Madrid para suplir a Montilla en el ministerio de Industria- perdería cuatro actas. Por su parte, CiU pasaría de nueve a catorce concejales. El PP iba a perder uno de los siete concejales que tiene en la actualidad. Con todo, los socios del actual tripartito municipal -tanto ERC como ICV- conseguirían mantenerse en sus posiciones con cinco actas para cada uno. En definitiva, los tres componentes del cartapacio municipal según la fórmula tripartita sumarían la mayoría necesaria para gobernar de nuevo, pero con un PSC manifiestamente erosionado. Ahí es donde aparece como incógnita el partido Ciutadans. Anunciada su voluntad de concentrarse en las elecciones municipales en Cataluña, su perspectiva en Barcelona no es mala. Si en las elecciones autonómicas obtuvo 31.951 en Barcelona, eso le sitúa a muy pocas décimas para entrar en la distribución de actas, para lo que le bastaría con agregar 5.000 votos al 4,5 por ciento obtenido en noviembre. Así estaría al límite de obtener dos actas de concejal. En general, la designación tan apresurada de

Hereu como candidato y el proceso de declive socialista permiten preannunciar un avance de CiU y que el PP encabezado por Alberto Fernández Díaz mejore de alguna manera sus cotas actuales pero, salvo circunstancias de extremo, no es fácil atajar la suma del tripartito.

Tantos afanes ha dedicado el nacionalismo catalán a consagrar Cataluña como un oasis alejado de las reyertas españolas que hay que mirar para otro lado ante la dimensión de la actual crisis de autoridad. Viene de lejos, tal vez de demasiado lejos. Barcelona quiso ser la más antiautoritaria de las ciudades y el *Establishment* nacionalista –incluyendo el maragallismo– marcó tanto las diferencias con la España menos europea que no sabe reconocer cómo ha podido llegarse a la impunidad de unos centenares de “okupas” o a la violencia que en período pre-electoral eligió al PP como objetivo. La capital del oasis catalán tuvo que renunciar a acoger un encuentro de los ministros de vivienda de la Unión Europea, en parte por no poder garantizar la seguridad y en parte porque, si tenía que garantizarla, el espectáculo de confrontación entre “okupas” y fuerzas de seguridad dañaría la imagen pura y progresista de lo que queda del gobierno autonómico de Cataluña. Dicho de forma más rotunda: en Cataluña se ha renunciado a gobernar. Eso se estaba viendo desde hace largo tiempo.

Las autoridades universitarias y municipales han estado durante demasiado tiempo negando la evidencia, cortejando los instintos de esos grupúsculos de naturaleza intrínsecamente violenta, apaciguándolos con concesiones y halagos. En consecuencia, la UE no pudo reunirse en Barcelona y el PP no pudo hacer un mitin en Martorell, acosado en este caso por grupos increpantes y agresores entre los cuales había simpatizantes y afiliados del PSC-PSOE.

Es el problema de las burbujas: de vez en cuando estallan, del mismo modo que los oasis acaban por revelarse como espejismo. En realidad, la Cataluña que presentaban los propugnadores de un nuevo Estatuto autonómico –tan poco aclamado y votado con tanta abstención– poco tenía que ver con esa erupción de focos violentos en una campaña electoral anticipada en razón de la incompetencia y poca visión de la clase política catalana. Después del *Estatut* y del referéndum, parecía que la pérdida de autoestima de la so-

ciudad catalana había llegado al extremo: pero no, todavía le quedaba por constatar la cruda evidencia de una crisis de autoridad que tendría su correlato electoral en la formación de un nuevo tripartito. Son desperfectos que eclipsan aquellos monumentos que el nacionalismo catalán se erigió a sí mismo con profunda autocomplacencia.

4. EL TRIPARTITO REARMADO

Inmediatamente después de los primeros recuentos de la noche del 1 de noviembre, el mundo político-mediático catalán pudo dedicarse a la especulación sobre cómo componer un nuevo gobierno. Por aritmética fallaba ya la probabilidad más remota: Artur Mas presidente con el apoyo parlamentario del PP. Aunque CiU hubiese ido al notario para firmar que nunca pactaría con el PP, Mas dejaba la puerta abierta a que el PP le votase en la investidura y Josep Piqué –cabeza de lista del PP– había dedicado gran parte de la campaña a subrayar que su formación política, en tal caso, tendría un rol decisivo. Mucho más probables, las otras opciones eran la “sociovergencia” –PSC más CiU–, el ejecutivo puramente nacionalista –CiU más ERC– y una versión renovada del tripartito que había ingeniado Pasqual Maragall poco más de dos años antes, siguiendo el modelo de pacto en el ayuntamiento de Barcelona. Con indicios ya divisables en la misma noche electoral, el acuerdo previo entre PSC, ERC e ICV parecía tan consistente que fue perdiendo oxígeno la posición negociadora de Artur Mas en nombre del partido ganador en escaños y votos. En aquel momento, el factor fundamental para determinar el futuro no era sino la presión que ejercía en el PSC la Moncloa de acuerdo con la preferencia de Rodríguez Zapatero por un gobierno socioconvergente que le permitiera cambiar a ERC por CIU como socio parlamentario.

Al final, el PSC de Montilla decidió por su cuenta. Según el criterio de Montilla se trataba nada menos que de la supervivencia política del PSC: entrar en un gobierno bajo la presidencia de Mas hubiese anulado el PSC de forma drástica. Montilla piensa que el socialismo en Cataluña ha de ser catalanista porque el socialismo cuando no fue catalanista fue residual en Cataluña. La federación catalana del PSOE –dice Montilla– “era una fuerza absolutamente residual”, la fuerza mayoritaria era ERC. Ésa ha sido la forta-

leza electoral del PSC-PSOE, la fuente de su inmenso poder municipal aunque durante sucesivas elecciones autonómicas Jordi Pujol les cogiera buena ventaja. Es un cálculo con muchos elementos aleatorios saber si al PSC le desgastaría más la sociovergencia que pactar con una ERC que inicialmente acate los pactos y luego –por su propia naturaleza– se dedique a dinamitar lo construido.

La representatividad de quien pasó a presidir el tripartito estaba mermada por el retroceso de casi un 25 por ciento de votos. La credibilidad del nuevo tripartito tampoco venía avalada por un propósito explícito y programático de reeditarla a la menor oportunidad. No fue ése un claro objetivo del que el electorado tuviese noticia concreta –salvo por parte de ICV– aunque en la vida pública catalana ésa fuera la opción –a gusto a o disgusto– más cantada. En el núcleo interior de la campaña electoral de CiU, considerada en exceso agresiva en ocasiones, chocaban dos percepciones: la idea de CiU como partido natural de gobierno que iba a expulsar del paraíso a los intrusos y el temor a lo que en realidad iba a ocurrir, una renovación de tripartito por falta de un vuelco electoral hacia el partido liderado por Artur Mas.

Son sustanciales por casi inevitables las consecuencias de las elecciones autonómicas de 1 de noviembre: el abstencionismo, retroceso del PSC-PSOE, insuficiencia de la ventaja dada por los electores a CiU, nuevo distanciamiento entre PSOE y CiU, gestión del *Estatut* y el largo catálogo de disfunciones que el tripartito ya protagonizó en su primera versión sin que ahora parezca factible que la autoridad de José Montilla logre atajarlas. En tales casos, para salirse del atolladero lo más expedito es ejercer la demagogia, antes que dedicarse a la gestión, como seguramente preferiría Montilla. Lo que ocurre es que el tripartito es el problema y no la solución.

En realidad, problemas los tienen todos los partidos políticos catalanes, sea cual sea el resultado obtenido. El PSC pierde muchos votos, cede parcelas significativas de poder a ERC e ICV, aumenta su distancia con el PSOE y desnaturaliza su identidad política ante cientos de miles de votantes. A CiU, tan solo un derrumbe interno del tripartito le permitiría reconsiderar sus dos opciones postelectorales: pactar con el PSC o con ERC, ambas difícilmente digeribles. Por una parte también es cierto que ganó seis diputados, pero a

la vez perdió 90.000 votos en comparación con los comicios autonómicos anteriores. Inicialmente, CIU ha escenificado una cierta ruptura con el PSOE respecto a los Presupuestos Generales del Estado. Tiene mucha más entidad el hecho de que el catalanismo representado por CIU no haya renovado su paradigma y prosiga –a pesar de leves transfusiones de ideología liberal– en el camino sin retorno del esencialismo y la megalomanía particularista. De Pujol a Mas, la renovación conceptual y estilística de CiU no se ha producido, del mismo modo que siguen abiertas las trincheras de siempre entre Convergencia y Unió Democràtica. El posicionamiento ventajoso de ERC no disimula su faccionalismo interno, incentivado por su naturaleza asamblearia y por la dura tensión entre izquierda y soberanismo. En ICV saben que los votos ganados en las autonómicas pueden regresar al PSC en las elecciones generales, según un proceso habitual.

En el PP, el hecho de haber resistido todo un acoso político-mediático instrumentado hasta la violencia no puede dar lugar a la autocomplacencia por los resultados obtenidos a pesar de todo: de hecho, para el centro-derecha de toda España, una readecuación estratégica del PP en Cataluña es imprescindible para recuperar el poder y llegar a La Moncloa. La confusión entre estrategia propiamente catalana y coyunturas de tinte catalanista tal vez haya sido una resta y no una suma. En el caso de Ciutadans, la transformación de liga o movimiento a partido político implica compromisos programáticos más *in extenso* que pudieran diluir el mensaje inicial en el juego del día a día parlamentario, con la consabida asistencia de un entorno mediático e institucional considerablemente hostil.

Mientras tanto, hay datos fundamentales que se confirman una y otra vez. Por ejemplo, según la encuesta post-referéndum del CIS, 49,7 por ciento declaran que su lengua materna es el castellano y 43,0 por ciento que es el catalán. Tan solo un 15,1 por ciento se siente únicamente catalán. En otro capítulo, si un 63,5 se define como católico, un 63,9 reconoce que casi nunca asiste a misa y otros oficios religiosos.

La formación del gobierno autonómico tras los acuerdos para el segundo tripartito fue de tiempo dilatado, en virtud una vez más de la supersticiosa ilusión de estar negociando el gobierno de una nación con Estado, pero el

chalaneo fue propio de la realidad tal cual es, particularista y de ámbito sin horizontes. Carod obtuvo buenas ventajas en el *do ut des*. Iba a asumir el cargo de vicepresidente, figura institucional que jurídicamente no existe. El cargo puede crearse por ley pero en cualquier caso, dado el calendario político que se imponía a mediados de noviembre para la constitución del nuevo ejecutivo autonómico, eso iba a ser *a posteriori*. Otro detalle que caracterizaba los modos futuros del nuevo tripartito.

El ensueño ecologista ha dado muchos votos a ICV en pequeños pueblos. La contradicción entre crecimiento y conservacionismo va a instalarse en la vida pública. ICV buscará paralizar toda la obra pública que quieran emprender sus socios de gobierno, especialmente el PSC. Las falacias del proteccionismo ambiental van a tener largo recorrido.

La alianza PSC-PSOE, tan provechosa en otras oportunidades, queda gravemente deteriorada hasta un punto que algunos *insiders* consideran sin retorno. Desde hace un tiempo vuelve a estar presente la intención de tener grupo propio en las Cortes. El fraccionamiento interno actúa en dos niveles: en el ámbito catalán, donde la repetición del tripartito no fue un afán unánime del PSC-PSOE con el deslizamiento de votos hacia Ciutadans; en el ámbito del socialismo español, con sectores a los que no es fácil justificar un tripartito bis, como ya fue difícil la tesitura del *Estatut*.

Lo que Cataluña significa y representa en el conjunto de España no puede calificarse ahora mismo como contribución unánimemente respetada. Uno de los errores más grandes del momento presente –anota Josep Pla al comentar en 1932 las relaciones entre Francia y España, en plena Segunda República– consiste en creer que Francia “nos hará un trato especial porque hemos adoptado su forma de gobierno”. Eso, dice, son tonterías: “La política internacional no se mueve por razones de política abstracta o por ideología. Se mueve exclusivamente por intereses”. Por eso, del cambio de régimen en España, lo único que les interesa a los países extranjeros es la debilitación interna que se haya producido. “Hoy España es un país debilitado, empobrecido, inmovilizado por sus querellas internas y por sus problemas intestinos. Para el extranjero esto es magnífico, es favorable en todos los sentidos. ¿Qué más se puede desear en esta época de enorme competencia?”

Una nota permanente es el signo de la política de los grandes países: el sentido de la continuidad, la evolución “lenta, segura, sólida”, de gran peso en política exterior –y también en general– “porque todo lo bueno que puede producir un cambio en el terreno relativo y empírico de la política, no compensa nunca lo malo que el cambio produce”.

Por remota que pueda parecer, la posibilidad de regresión a una mentalidad política como la que dictaba en 1921 el telegrama a Abd El-Krim representaría –como fue la entrevista de Carod-Rovira con ETA– una ruptura simbólica que a la larga no dejaría de tener repercusión formal. En el tripartito rearmado hay elementos para la sospecha. *Mutatis mutandi*, la reflexión de Pla sobre política exterior tiene también validez en el orden interior puesto que no sería nueva la tentación de desestimar los intereses de España con el objetivo de realzar los de Cataluña. En tal caso, los primeros desperfectos –como venimos viendo– indudablemente serían para Cataluña.